



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE PUERTO GAITÁN**

Puerto Gaitán, quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

TUTELA	2021-00199-00
ACCIONANTE	JUDITH SOBEIDA RUIZ ALVARADO
ACCIONADA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BATEAS

Procede el Despacho a emitir decisión en relación con la acción de amparo Constitucional deprecada por la ciudadana JUDITH SOBEIDA RUIZ ALVARADO contra la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BATEAS.

I. ANTECEDENTES

1. PRETENSIÓN: La señora JUDITH SOBEIDA RUIZ ALVARADO actuando en causa propia solicitó que se le proteja el derecho fundamental de petición, que considera vulnerado por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BATEAS, concretamente contra el presidente JUAN CARLOS USECHE BENAVIDEZ y la tesorera GILMA MARIA PALACIOS CASTRO, por cuanto a la fecha no ha obtenido respuesta a un derecho de petición.

Aduce como hechos más relevantes que el día 13 de julio de esta anualidad, radicó derecho de petición ante los accionados, con el objeto de que se entregara una rendición de cuentas, entre otras solicitudes. Finalmente reitera sean tutelados sus derechos vulnerados.

2. RESPUESTA DE LA ACCIONADA:

La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BATEAS se pronunció a través de los accionados JUAN CARLOS USECHE BENAVIDEZ y GILMA MARIA PALACIOS CASTRO; no obstante, no acreditaron haber remitido la respuesta correspondiente a la dirección indicada por la actora.

II. COMPETENCIA

Este Despacho Judicial es competente para conocer y fallar la presente Acción de Tutela, de conformidad con lo previsto en el Art. 86 de la Constitución Nacional de 1991, los Decretos 2591 de 1991, 1382 del 2000, 1983 de 2017 y demás Normas complementarias.

III. CONSIDERACIONES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

Conforme a lo consagrado en el artículo 86 Constitucional, toda persona tendrá Acción de Tutela, para reclamar ante los Jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de sus Derechos Constitucionales Fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la Acción u Omisión de cualquier Autoridad Pública. El Decreto 2591 de 1991 hizo extensiva esta Acción a los particulares en desarrollo de lo dispuesto en el inciso final del artículo 86 ya mencionado que dispone, que la ley establecerá los casos en los que la Acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, respecto de los cuáles el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

Es entonces la Acción de Tutela un mecanismo jurídico, sencillo y expedito, dirigido a los Jueces y Magistrados y orientado a obtener el amparo contra los actos que violen, trasgredan o amenacen los Derechos Fundamentales consagrados constitucionalmente. De esto dimana que, en el Estado Constitucional, cuyo fin supremo es la salvaguardia y protección de la vida, la Libertad, la Igualdad y la Dignidad Humana, no se puede concebir que alguno de los Derechos Fundamentales del ser humano se quede sin el amparo Estatal para su ejercicio efectivo y pleno.

Así mismo ha manifestado la Corte que dos características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico Colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez; la primera por cuanto no solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de un instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser de que busque evitar un perjuicio irremediable (Artículo 86, inciso 3 de la constitución). La segunda, puesto que la acción ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación amenazado.

En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de presiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental.

Debido entonces a las especialísimas características de la acción de tutela, es que se impone al juez constitucional hacer todo lo que esté a su alcance para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales en cada caso, y para el efecto, cuenta con algunas facultades y deberes, entre los cuales se destaca, el de escudriñar tanto los hechos que puedan configurar una amenaza o vulneración de aquellos derechos, como precisamente todos los que puedan resultar afectados. De cara a dicha finalidad, el funcionario no está sujeto ni limitado al contenido de la solicitud de amparo, sino que puede entre otras cosas, fallar incluso *ultra y extra petita*, esto es, pronunciarse sobre hechos y derechos que no hubiese sido expuestos e invocados en el escrito presentado por el accionante.

1. Problema jurídico.

Se trata de establecer si efectivamente los demandados han vulnerado el derecho fundamental de petición en perjuicio de la accionante.

2. Análisis del caso concreto.

En concreto considera la accionante, que el derecho fundamental de PETICIÓN le ha sido desconocido y vulnerado, ante la actitud omisiva asumida por la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BATEAS, concretamente por el presidente JUAN CARLOS USECHE BENAVIDEZ y la tesorera GILMA MARIA PALACIOS CASTRO, al no responder un derecho de petición de manera integral.

Vale aclarar que el derecho fundamental de petición aparece consagrado en el Artículo 23 de la Carta Política Colombiana, en virtud del principio universal de que toda persona tiene la atribución de presentar solicitudes por motivos de interés particular o general y a obtener pronta respuesta, derecho que es legalmente reglamentado en el Ordenamiento Contencioso Administrativo.

Por otra parte, el derecho de petición comporta como obligación para su destinatario no solamente la manifestación de la administración o de los particulares sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho que dicha manifestación constituya una respuesta clara y pronta a la petición planteada según sea el caso materia de controversia.

La Jurisprudencia Constitucional ha planteado varios elementos estructurales de la obligación. En primer lugar, la manifestación debe ser adecuada a la solicitud planteada; dicho en otros términos correspondencia e integralidad, son elementos fundamentales en la respuesta. La respuesta debe ser efectiva en aras a la solución del caso planteado. Igualmente, la comunicación debe ser oportuna, estas exigencias son acumulativas.

Pero bien, así como el Estado Constitucional protege ese derecho fundamental, los asociados deben igualmente ceñirse a unos parámetros que no vayan en contravía de la lógica y de la seriedad del interés jurídico que le asiste al solicitante, en aras a evitar la inocuidad de la petición y la proliferación de solicitudes innecesarias.

Al respecto la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia T-021 de 1998 señaló:

“...De la naturaleza misma del derecho de petición y, por tanto, de su núcleo esencial, objeto de protección a través de la acción de tutela, hace parte la certidumbre de que, independientemente del contenido de lo que se solicita, se habrá de obtener respuesta oportuna y de fondo. Para tener derecho a la pronta contestación, no es requisito indispensable que se invoque expresamente el derecho de petición, ni que se mencione el artículo 23 de la Carta Política, ni tampoco que se enumeren las normas del Código Contencioso Administrativo que desarrollan las reglas aplicables. Basta que del escrito correspondiente -o del acta de la exposición verbal, en su caso- pueda extraerse que el deseo de la persona es el de formular una petición, en interés general o particular, para que al asunto se le deba dar el trámite propicio a la satisfacción del indicado derecho fundamental, y para que principien a correr los términos legales para la pronta resolución...”

Es cierto que la concepción que del Estado Constitucional se gestó en La Carta Política, tiene como fin supremo la protección también de la igualdad y dignidad humana, que son inherentes al derecho de petición, y no puede concebirse en ese contexto, que alguno de éstos derechos fundamentales quede sin el amparo Constitucional para su ejercicio efectivo y pleno; pero no es menos cierto que las peticiones deben guardar consonancia con la lógica y ser coherentes con lo que el solicitante pretende, esto es, dirigir la solicitud a la persona o ente directamente obligado a contestar y que la respuesta sea evidentemente necesaria.

La Honorable Corte Constitucional reiteradamente ha precisado que el DERECHO DE PETICIÓN solo se hace efectivo cuando se ofrece una respuesta adecuada a la solicitud que el peticionario pretende le sea respondida, y no a otra erradamente deducida por la autoridad o el particular ante quién se elevó la petición. Con mayor razón resulta más grave la omisión por la autoridad o por los particulares a dar respuesta a lo solicitado.

Una actuación verdaderamente respetuosa del derecho de petición, debe atender prontamente las peticiones de los ciudadanos, porque esto es lo mínimo que debe exigirse a los asociados interrelacionados en el mundo actual, en el que frente a una petición le es consustancial a ella su respectiva respuesta. Ello es apenas racional en el entorno de un Estado Constitucional de Derecho, tal como aparece concebido por la Carta Fundamental. Un proceder en contravía a ese contexto Constitucional, no puede ser permisible so pena de socavar derecho fundamental tan primario y de propiciar un claro detrimento a la dignidad de la persona humana, con el ítem de que los fines Constitucionales por los que propugna la Norma Superior sean burlados en actitud avasallante del ordenamiento jurídico.

De acuerdo con lo anterior, si apreciamos las circunstancias que han rodeado el insuceso que es materia de análisis, dentro del ámbito de lo expuesto por la parte demandante se debe destacar lo siguiente:

Según las pruebas documentales allegadas con el escrito de tutela, está claro que la accionante junto con otro grupo de ciudadanos, radicaron el día citado la solicitud aludida. De otro lado, conforme a la contestación de la tutela, se observa que al momento de radicar la presente acción de tutela, el derecho de petición no ha sido respondido, por lo que la accionante tiene fundamento para reclamar como vulnerado el derecho de petición. De suerte que para el Despacho es incontrovertible que el derecho de petición invocado como transgredido por la demandante en su acción de tutela, se encuentra vulnerado por la entidad accionada, por lo siguiente:

Es necesario indicar desde ya que para este Despacho no son de recibo los argumentos presentados por los representantes de la accionada JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO BATEAS, toda vez que el derecho de petición se debe responder en su integridad, y tal como se desprende de la respuesta enviada al Despacho, no se ha atendido el requerimiento de la actora, pues no se aportó por parte de los accionados copia del envío de la respuesta a la dirección aportada por la quejosa, infiriéndose con ello a la fecha no se ha respondido su derecho de petición.

Así las cosas, sin duda alguna la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BATEAS, a través de su presidente JUAN CARLOS USECHE BENAVIDEZ y la tesorera GILMA MARIA PALACIOS CASTRO, han omitido su deber Constitucional de dar respuesta, y están obligados a responder de manera integral el derecho de petición presentado el día 12 de julio de 2021 por la ciudadana JUDITH SOBEIDA RUIZ ALVARADO.

Es por lo anteriormente expuesto, que este Despacho fallará favorablemente a la accionante JUDITH SOBEIDA RUIZ ALVARADO el amparo Constitucional deprecado. Consecuencialmente ordenará a los demandados JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BATEAS a través de su presidente JUAN CARLOS USECHE BENAVIDEZ y la tesorera GILMA MARIA PALACIOS CASTRO, para que procedan a dar respuesta integral por escrito a favor de la demandante en un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión al DERECHO DE PETICIÓN que ante esa entidad radicó la misma el día 12 de julio de 2021.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, Meta, Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. - AMPARAR el derecho constitucional y fundamental de petición a favor de la señora JUDITH SOBEIDA RUIZ ALVARADO, en los términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

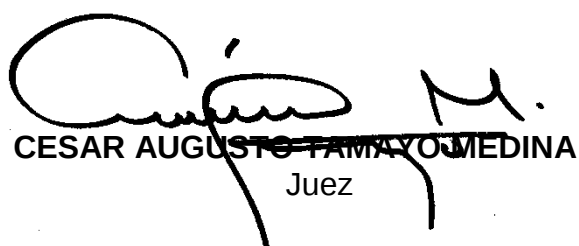
SEGUNDO. - ORDENAR a la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO BATEAS DE PUERTO GAITÁN, META, a través de su presidente JUAN CARLOS USECHE BENAVIDEZ y la tesorera GILMA MARIA PALACIOS CASTRO, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente decisión, procedan a dar respuesta INTEGRAL al derecho de petición radicado el día 12 de julio de 2021, por la ciudadana JUDITH SOBEIDA RUIZ ALVARADO.

TERCERO. - El incumplimiento al presente fallo constituye desacato sancionable conforme a la Ley.

CUARTO. - **NOTIFÍQUESE** a las partes la presente decisión por el medio más expedito.

QUINTO. - Si el presente fallo no fuere impugnado, envíese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


CESAR AUGUSTO TAMAYO MEDINA
Juez